



RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Nº **001** – 2016 – GRJ/GRPPAT

Huancayo, **18 OCT 2016**

EL GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTOS:

El Memorando N° 569-2016-GRJ-ORAF/ORH, Reporte N° 056-2016-GRJ/ORF/ORH/CEP, y el Informe Técnico N° 100-2016-GRJ/ORAF/ORH/STPAD, y los datos generales del proceso:

Identificación de los servidores civiles (investigados):

Apellidos y Nombres	Cargo	Desde	Hasta	Dirección	Resolución	DNI
Ing. Ciro I. CRISTOBAL DE LA CRUZ	Coordinador de Escalafón y Pensiones Profesional 7	07/04-1986	continua	Psje. José Varallanos N° 321 siglo xx - El Tambo	D.L. N° 276	19979715
Lic. Julio Cesar MUNGI NUÑEZ	Sub Gerente de Cooperación Técnica y Planeamiento	01/01/2015	15/04/2015	Jr. Paucartambo N° 415 san Ramón – Chanchamayo	RER. N° 007-2015-GRJUNIN/PR	07962046

CONSIDERANDO:

DE LOS HECHOS:

2.1. Hechos imputados.-

Que, según se tiene del Memorando N° 569-2016-GRJ/ORAF/ORH, de fecha 05 de agosto de 2016, emitido por el Sub Director de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Junín, los cargos imputados en contra del administrado Lic. Julio César Mungi Núñez, ex Sub Gerente de Cooperación Técnica y Planeamiento; consiste en que:

"(...) Que a la fecha no existe Proceso Administrativo Disciplinario en contra del señor Julio César MUNGI NUÑEZ, por presentar Declaración Jurada presuntamente que no se ajustaba a la verdad; además que ha quedado archivado en la Procuraduría Pública Regional, de acuerdo al informe del SISGEDO.

(...) teniendo en cuenta que es competencia de su despacho evaluar tales hechos y de acuerdo al pronunciamiento si le asiste Aperturar Proceso Administrativo Disciplinario al Ex Funcionario aludido, Julio Cesar Mungi Núñez, Ex Sub Gerente de Cooperación Técnica y Planeamiento y servidor".

Que, según se tiene del Reporte N° 056-2016-GRJ/ORAF/ORH/CEP de fecha 01 de setiembre de 2016, suscrita por el Ing. Ciro I. Cristóbal De La Cruz, Coordinador de Escalafón y Pensiones del Gobierno Regional de Junín; los cargos imputados en su contra; consiste en que:

DOC. N°	1731876
EXP. N°	1147761





"(...) se advierte que la entidad no cuenta con un servidor o personal de tenga la función de revisar la veracidad de los documentos presentados por personas para ser designados como funciones de confianza (...)"

DE LOS ANTECEDENTES:

- ❖ En cuanto al Lic. Julio César Mungi Núñez, ex Sub Gerente de Cooperación Técnica y Planeamiento.

La Disposición Fiscal de Investigación Preliminar Compleja, signada con caso: 209-2015-2206010104, de fecha 21 de Junio de 2016, seguida contra Ángel Dante Unchupaico Canchumani por la presunta comisión del delito contra La Administración Pública en la modalidad de NOMBRAMIENTO INDEBIDO PARA CARGO PÚBLICO, y contra Julio César Mungi Núñez por la presunta comisión del delito contra La Administración Pública en la modalidad de ACEPTACIÓN INDEBIDA PARA CARGO PÚBLICO, en agravio de EL ESTADO, representando por el Gobernador Regional de Junín; precisando dispone: *"(...) REQUIERASE al denunciado ANGEL DANTE UNCHUPAICO CANCHUMANI cumpla con presentar INFORME DOCUMENTADO en copias certificadas o fedateadas respecto a las adoptadas en mérito a la Declaración Jurada Incorrecta que habría presentado el denunciado Julio César Mungi Núñez, para su designación como funcionario en el Gobierno Regional de Junín; ello en mérito al Memorandum N° 536-2015-GRJ/GR (...)"*.

Memorando N° 1505-2016-GRJ-GGR, de fecha 01 de julio de 2016, emitido por el Gerente General Regional, dirigiéndose al Sub Director Regional de Recursos Humanos, solicitándole se sirva cursar información documentado en copias certificadas o fedateadas respecto a las acciones adoptadas en mérito a la Declaración Jurada incorrecta que habría presentado el administrado Lic. Julio Cesar Mungi Núñez.

Memorando N° 517-2016-GRJ/ORAF/ORH, de fecha 12 de julio de 2016, emitido por el Sub Director Regional de Recursos Humanos, dirigida a Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios, solicitándole información si al ex funcionario Julio César Mungi Núñez ex Sub Gerente de Cooperación Técnica y Planeamiento, se le instauró proceso administrativo disciplinario, en mérito a la declaración jurada incorrecta que habría presentado.

Reporte N° 278-2016-GRJ-ORAF/ORH-STPAD, de fecha 26 de Julio de 2016, emitida por Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios, dirigida al Sub Director de Recursos Humanos, informando que a la fecha no existe proceso administrativo disciplinario, en contra de la persona de Julio César Mungi Núñez, quien habría presentado la declaración jurada incorrecta para efectos de su designación como funcionario en ésta Entidad. Es así, mediante Reporte N° 277-2016-GRJ-ORAF/ORH-STPAD, se solicita al Abog. Juan Esteban Hilario, Procurador Público Regional, que informe sobre las acciones adoptadas en cuanto al documento de la referencia, haciéndose mención que mediante Memorando N° 536-2015-GRJ-GR, de fecha 02 de octubre de 2015, suscrita por el Gobernador Regional del Gobierno Regional de Junín, solicita información sobre las acciones adoptadas respecto al documento antes cuestionado; el mismo que ha dado cuenta. Ante ello, hace llegar el Memorando N° 1106-2016-GRJ/PPR, de fecha 27 de Julio de 2016, informando que esta ante la existencia de la Carpeta Fiscal N° 2015-209 por ante la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Investigación Preliminar.

Memorando N° 569-2016-GRJ/ORAF/ORH, de fecha 05 de agosto de 2016, emitida por el Sub Director de Recursos Humanos, en referencia al Reporte N° 278-2016-GRJ-ORAF/ORH-STPAD, hace llegar, en copia:





- Copia de la Declaración Jurada de fecha 21 de Enero de 2015, en la cual la persona de Julio César Mungi Núñez, declara bajo juramento, precisando: "(...) *ni poseo antecedentes penales o policiales, ni haber sido sometido a procesos disciplinarios o sanciones administrativas que me impidan laborar en el Estado* (...) Esta declaración se formula en aplicación del principio de presunción de veracidad establecido en el Artículo 42° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General".
- Copia de la Disposición Fiscal de Investigación Preliminar Complejo antes aludido.
- Copia del Memorando N° 536-2015-GRJ/GR, de fecha 02 de Octubre de 2015, emitido por el Mg. Ángel Dante Unchupaico Canchumani, Gobernador Regional del Gobierno Regional de Junín, y dirigida al Gerente General Regional, haciendo reiterativo, que informe bajo responsabilidad sobre las acciones adoptadas respecto a la Declaración Jurada incorrecta que habría presentado el señor César Mungi Núñez, para efectos de su designación como funcionario en esta Entidad. Donde a la vez hace indica que el referido funcionario fue cesado en el cargo de confianza en el mes de abril del presente año y posteriormente su Despacho propuso a otro servidor para remplazarlo en el cargo.
- Por lo demás, hace llegar otros documentos, que guarda relación con éstos hechos investigados.

Reporte N° 056-2016-GRJ/ORAF/ORH/CEP, de fecha 01 de setiembre de 2016, emitido por el Ing. Ciro I. Cristóbal De La Cruz, Coordinador de Escalafón y Pensiones del Gobierno Regional de Junín, dirigida a la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios; donde pone de conocimiento: *"que a la verificación a los documentos normativos de gestión, se advierte que la entidad no cuenta con un servidor o personal que tenga la función de revisar la veracidad de los documentos presentados por personas para ser designados como funcionarios de confianza, en razón que la designación de tales cargos es facultad del titular del pliego, quien entre otros, en base a los criterios pre establecidos en el ROF y MOF, otorga dicha condición. Ahora bien, la persona que proporciona los documentos para ser designados en un cargo de confianza, es el responsable de sustentar y justificar la validez o veracidad de tales documentos (...)"*. En la cual también hace llegar:



- Copia de la Resolución Ejecutiva Regional N° 070-2015-GR-JUNIN/PR, de fecha 07 de enero de 2015, que en su artículo primero de la parte resolutive, resuelve: *"DESIGNAR a partir de la fecha al Lic. JULIO CESAR MUNGI NUÑEZ, en el cargo de confianza de Sub Gerente de Cooperación Técnica y Planeamiento de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Junín, de nivel remunerativo F-4"*.
- Copia del Memorando Múltiple N° 007-2015-GRJ/ORAF, de fecha 21 de Enero de 2015, emitida por la CPC. Jesús Melchora Ascurra Palacios, Directora Regional de Administración y Finanzas, dirigida al Lic. Julio César Mungi Núñez, Sub Director de Cooperación Técnica y Planeamiento, comunicando: *que de conformidad con los dispositivos legales de la referencia, deberá presentar los siguientes documentos 1. Declaración Jurada de Bienes, Ingresos y Rentas, con sello de post firma. 2. Declaración Jurada de no estar impedido para contratar con el estado, no tener antecedentes penales y nepotismo. 3. Copia simple DNI vigente. 4. Currículum vitae documento en copia simple. La información requerida será remitida a la Oficina de Recursos Humanos, en un plazo máximo de 48 horas después de recibido el presente documento, el mismo que será remitido a la Contraloría General de la República, en aplicación al Decreto Supremo N° 080-2001-PCM Reglamento de la Ley N° 27482.*
- Por lo demás también hace llegar otros documentos, que guarda relación con éstos hechos investigados.



- ❖ En cuanto al Ing. **Ciro I. Cristóbal De La Cruz**, Coordinador de Escalafón y Pensiones del Gobierno Regional de Junín.

Reporte N° 314-2016-GRJ-RAF/ORH/STPAD, de fecha 26 de Agosto de 2016, emitida por Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios, dirigida al Ing. **Ciro Cristóbal De La Cruz**, del cual se precisa, se solicita: *que remita un informe detallado del servidor (es), encargado de revisar la veracidad de los documentos presentados por el ex Servidor **Julio César Mungí Núñez**, para su designación como funcionario de la Entidad (Sub Gerente de Cooperación Técnica y Planeamiento), esto por cuanto a la Declaración Jurada de fecha 21 de enero de 2015, suscrito y presentado por el mismo, afirma no poseer antecedentes penales o policiales, hecho que ha transgredido el principio de presunción de veracidad.*

TIPIFICACION DE LA FALTA:

Se debe tener en cuenta; que en materia sancionadora el **principio de legalidad** impide que se pueda atribuir la comisión de una falta si ésta no está previamente determinada en la ley, y también prohíbe que se pueda aplicar una sanción si ésta no está determinada por la ley. Como lo ha expresado el Tribunal Constitucional (Cfr. Expediente N.º 010-2002-AI/TC), este principio impone tres exigencias: la existencia de una ley (*lex scripta*), que la ley sea anterior al hecho sancionado (*lex praevia*), y que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado (*lex certa*).

Los PAD instaurados desde el 14 de septiembre de 2014, por los hechos cometidos a partir de dicha fecha, se regirán por las normas procedimentales y sustantivas sobre régimen disciplinario previstas en la Ley N° 300057 y su Reglamento.

Que sobre los hechos imputados a los involucrados, constituirían faltas de carácter administrativo; que no es más **“Toda acción u omisión voluntaria o no que contravengan las obligaciones, prohibiciones y demás normas sobre los deberes de funcionarios y servidores”**; en el presente caso, se ha vulnerado el artículo 85, letras a), d) y q) - Ley 30057-Ley de Servicio Civil, que prescribe:

Artículo 85, letras a), d) y q) - Ley 30057-Ley de Servicio Civil

Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo: a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley su Reglamento, d) La negligencia en el desempeño de las funciones, y q) Las demás que señale la ley”.

Norma que resulta concordante con lo establecido para el caso, en el acápite 98.3 del art. 98° del Reglamento de la Ley N°30057, aprobado por D.S. N° 040-2014-PC, que prescribe: 98.3. *La falta por omisión consiste en la ausencia de una acción que el servidor o ex servidor civil tenía obligación de realizar y que estaba en condiciones de hacerlo.*

De igual forma; lo establecido, en los incisos a) y d) del artículo 39°-Ley 30057, Ley de Servicio Civil, que prescribe: *“Son obligaciones de los servidores civiles, las siguientes: (...) a) Cumplir leal y diligentemente los deberes y funciones que impone el servicio público” y “d) Salvaguardar los intereses del Estado y emplearlo austeramente los recursos públicos”.*





Esto al haber, transgredido:

Lo dispuesto en el artículo IV numeral 1.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, "Principio de Legalidad, las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas". Es así, que es pertinente tener en consideración que en el Estado Constitucional Democrático, el poder público, está sometido al Derecho, lo que supone, entre otras cosas, que la actuación de la Administración deberá dar cuenta de esta sujeción a fin de despejar cualquier sospecha de arbitrariedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de la Administración deben contener una adecuada motivación, tanto de los hechos, como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso.

En cuanto al administrado Lic. Julio César Mungi Núñez, ex Sub Gerente de Cooperación Técnica y Planeamiento.

La Ley N° 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública, en su artículo 6, describe a los Principios y Deberes Éticos del Servidor Público; precisando el su numeral 8°, describe: *El funcionario de confianza debe lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho.* En ese sentido; en el numeral 10.1 del artículo 10, de esta misma Ley; señala: *La aplicación de las sanciones se realizará teniendo en consideración los siguientes criterios: 10.1. El perjuicio ocasionado a los administrados o a la administración pública.*

Ahora bien, para efectos de instruir proceso administrativo disciplinario a éste administrado; se debe tener en cuenta lo dispuesto en los numerales 243.1 y 243.2 de la Ley 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General: "243.1. Las consecuencias civiles, administrativas o penales de la responsabilidad de las autoridades son independientes y se exige de acuerdo a lo previsto en su respectiva legislación. 243.2. Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la potestad de las entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad administrativa, salvo disposición judicial expresa en contrario.



En cuanto al administrado Ing. Ciro I. Cristóbal De La Cruz, Coordinador de la Oficina de Escalafón y Pensiones.

El Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Junín (ROF), en su artículo 39, señala, que: "La Oficina de Recursos Humanos está dirigida por un Sub Director, quien es designado por el Presidente Regional a propuesta del Gerente General Regional. Tiene las funciones siguientes: a) Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades relacionadas con Administración de recursos humanos, de conformidad con la política institucional y dispositivos legales vigentes; b) Normar y administrar los procesos técnicos de personal: clasificación, selección, asignación, promoción, capacitación, escalafón, evaluación, control y bienestar del personal del Gobierno Regional Junín.

El Manual De Organización Y Funciones Del Gobierno Regional de Junín (MOF); referente al Coordinador de Escalafón; señala: que entre sus funciones específicas es: "(...) b) Organizar y mantener actualizado el legajo de personal de los servidores activos, funcionarios y cesantes del Gobierno Regional Junín, extractando los reportes necesarios y los que indique el Sub Director. c) Implementación y actualización de los legajos de personal, activos y pensionistas de funcionarios, directivos, profesionales, técnicos y auxiliares. d) Recibir, clasificar y administrar la documentación perteneciente a los servidores y funcionarios del Gobierno Regional Junín. e) Formular y mantener actualizado la base de datos del escalafón del personal (...)"



Los hechos investigados, se rigen por las reglas procedimentales previstas en la Ley 30057, Ley de Servicio Civil (LSC), por cuanto el Proceso Administrativo Disciplinario (PAD), se ha instaurado después del 14 de setiembre de 2014, fecha en que ha entrado en vigencia ésta ley.

El Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 30057, permite al Secretario Técnico (ST), investigar de oficio cuando existan indicios razonables sobre la comisión de una falta.

SUBSUNCION DE LOS HECHOS A LA NORMA.-

En la Sentencia N.º 090-2004-AA/TC, el Tribunal ha expresado que: "(...) el deber de motivar las decisiones administrativas alcanza especial relevancia cuando en las mismas se contienen sanciones". En la medida que una sanción administrativa supone la afectación de derechos, su motivación no sólo constituye una obligación legal impuesta a la Administración, sino también un derecho del administrado, a efectos de que éste pueda hacer valer los recursos de impugnación que la legislación prevea, cuestionando o respondiendo las imputaciones que deben aparecer con claridad y precisión en el acto administrativo sancionador. De otro lado, tratándose de un acto de esta naturaleza, la motivación permite a la Administración poner en evidencia que su actuación no es arbitraria sino que está sustentada en la aplicación racional y razonable del derecho y su sistema de fuentes".

Razones del Archivamiento de Denuncia en contra del administrado servidor Ing. Ciro I. Cristóbal De La Cruz, (Análisis y Conclusión).

Que, es pertinente considerar que es deber de todo órgano decisor, en cautela del debido procedimiento, resolver la controversia puesta a su conocimiento según el mérito de lo actuado; y, habiéndose procedido a la valoración de los documentos y actuaciones que obran en el expediente, corresponde en esta etapa efectuar el análisis jurídico de la investigación preliminar.

Que, en el caso de actuados, según se tiene del Reporte N° 056-2016-GRJ/ORAF/ORH/CEP, de fecha 01 de setiembre de 2016, emitido por el administrado **Ing. Ciro I. Cristóbal De La Cruz**, Coordinador de la Oficina de Escalafón y Pensiones, advierte que la entidad no cuenta con un servidor o personal que tenga la función de revisar la veracidad de los documentos presentados por personas para ser designados como funcionarios de confianza. Y que la persona que proporciona los documentos para ser designados en un cargo de confianza, es el responsable de sustentar y justificar la validez o veracidad de tales documentos.

Ahora bien; visto el documento que es materia de cuestionamiento "Declaración Jurada", de fecha 21 de Enero de 2015, en la cual el Lic Julio César Mungi Núñez, declara bajo juramento, precisando: "(...) *ni poseo antecedentes penales o policiales, ni haber sido sometido a procesos disciplinarios o sanciones administrativas que me impidan laborar en el Estado.* Agregado a ello; en la parte final también señala: (...) *Esta declaración se formula en aplicación del principio de presunción de veracidad establecido en el Artículo 42º de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General*". Que, en cuanto a éste dispositivo legal, en el numeral 42.1, dispone: "*Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario*". Lo que señala ésta normatividad que, en todo procedimiento administrativo, debe presumirse que los documentos presentados y las declaraciones





formuladas por los administrados se encuentran conforme a lo prescrito por ley y responden a la verdad de los hechos que afirman. Por lo tanto; en el caso sub materia, el administrado actuó dentro del marco legal, respetando el ROF Y MOF de la entidad, que de acuerdo a la naturaleza de sus funciones son los competentes para pronunciarse; más aún, que la documentación presentada era para ocupar un cargo de confianza de la Entidad; en ese contexto y encontrarse en el ámbito administrativo es de plena aplicación el principio de confianza como un filtro de la imputación objetiva, aplicándose al caso en concreto. Por consiguiente; no podría decirse, que el administrado haya omitido el cumplimiento de sus funciones, habiendo actuado conforme a ley; por consiguiente, en estos hechos resulta de plena responsable quien consigna o hace consignar los datos falsos en un documento.

En consecuencia, estando a lo antes colegido y documentos válidamente incorporados al proceso, imposibilitan dar inicio al Procedimiento Administrativo Disciplinario, por no existir indicios indubitables y suficientes de la comisión de una falta administrativa, debiendo archivarse en éste extremo la denuncia.

Razones del inicio del Proceso Administrativo Disciplinario, en contra del administrado Lic. Julio César Mungi Núñez, (Análisis y Conclusión).

Que, es pertinente considerar que el funcionario público es el ciudadano elegido o designado por autoridad competente, conforme al ordenamiento legal, para desempeñar cargos de más alto nivel en los poderes públicos y los organismos con autonomía. Ejerce representación de la voluntad del Estado en virtud de una especial delegación, transmitida en principio por Ley, y posteriormente por decisión administrativa contenida en una Resolución. Adopta decisión y puede en ciertos casos, estar facultado para resolver. Proyecta su actividad al exterior del esquema organizacional en virtud de representación.

Que, estando a lo antes colegido y teniendo en cuenta el Memorando N° 569-2016-GRJ/ORAF/ORH, la falta disciplinaria imputable al administrado **Lic. Julio César Mungi Núñez**; sería por haber actuado en forma imprudente, al presentar una declaración jurada consignando datos incorrectos en la designación de cargo de confianza como Sub Gerente de Cooperación Técnica y Planeamiento de ésta Entidad, aduciendo "(...) declaro bajo juramento lo siguiente (...) No percibo otros ingresos por parte del Estado; ni poseo antecedentes penales o policiales (...)". Por consiguiente, este administrado estaba en la obligación de informar con la veracidad de los hechos y que el caso ameritaba; más aún, por la confianza depositada en él, por el titular de la Entidad.



Consecuentemente, habiendo sido designado el administrado Sub Gerente de Cooperación Técnica y Planeamiento del Gobierno Regional de Junín, su accionar ha ocasionado perjuicio económico a la Entidad, al no haberse garantizado el normal desarrollo de las actividades de ésta área; más aún, crearse suspicacias a una mala imagen a la Entidad y sus representantes. Entonces, la decidía de éste funcionario, trajo como consecuencia grave retraso institucional, generando mayores gastos generales; con ello, la designación de un nuevo funcionario que éste cargo de confianza requiera; además de haberse agotado material humano, tiempo y servicio.

Posible sanción a la falta cometida.-

Que, estando a lo antes esgrimido; si bien es cierto, la falta disciplinaria que sería imputable a éste administrado, tendría sustento a la grave afectación a los bienes jurídicos protegidos por el Estado; sin embargo, en ella, no se puede apreciar con exactitud la magnitud de los daños y perjuicios a la Entidad; por ende, para efectos de determinar la sanción debe ser proporcional a la falta cometida, teniendo en cuenta la forma, modo y



circunstancias de cómo se suscitaron los hechos; y, no existiendo la concurrencia de varias faltas, como antecedentes consentidas o ejecutoriadas de ser reincidente en la comisión de faltas; una posible sanción puede servir para advertirle sobre las posibles consecuencias que puede acarrear la persistencia en su conducta infractora; consecuentemente, la posible sanción a imponérsele a éste involucrado sería **suspensión sin goce de remuneraciones**, conforme a lo establecido en los incisos a) y c) del artículo 87, e inciso b) del artículo 88°, ambos de la Ley N° 30057-Ley de Servicio Civil; y artículo 92° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM concordante con el artículo 230° inciso 3 de la del Procedimiento Administrativo General.

ORGANO INSTRUCTOR COMPETENTE:

El órgano instructor en estos casos resulta competente la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del GRJ.

PLAZO DE PRESENTACION DE DESCARGO:

Que, conforme al literal a) del artículo 106° y 111° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, el plazo para que el procesado presente sus descargos en el proceso se deberá brindarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles, ante el Órgano Instructor. Dicho plazo se computa desde el día siguiente de la comunicación que determina el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Asimismo, dicho plazo que puede ser prorrogable debiendo ser justificable.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PROCESADO:

Que, conforme al Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, son derechos y obligaciones de los servidores, los siguientes:

“Artículo 96.1. Mientras esté sometido a procedimiento administrativo disciplinario, el servidor civil tiene derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva y al goce de sus compensaciones. El servidor civil puede ser representado por abogado y acceder al expediente administrativo en cualquiera de las etapas del procedimiento administrativo disciplinario.

Artículo 96.2. Mientras dure dicho procedimiento no se concederá licencias por interés del servidor civil, a que se refiere el literal h) del Artículo 153 del Reglamento mayores a cinco (05) días hábiles.

Artículo 96.3. Cuando una entidad no cumpla con emitir el informe al que se refiere el segundo párrafo de la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley del Servicio Civil en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, la autoridad competente formulará denuncia sin contar con dicho informe.

Artículo 96.4. En los casos en que la presunta comisión de una falta se derive de un informe de control, las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario son competentes en tanto la Contraloría General de la República no notifique la Resolución que determina el inicio del procedimiento sancionador por responsabilidad administrativa funcional, con el fin de respetar los principios de competencia y non bis in idem;

Que, estando a lo recomendado por la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de Junín y estando a lo dispuesto por esta Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y;

En uso de las facultades y atribuciones otorgadas por la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria mediante Ley N° 27902, concordante con la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; y demás normas conexas;





SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- NO HA LUGAR A LA APERTURA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra:

- ✓ El Ing. CIRO I. CRISTÓBAL DE LA CRUZ, Coordinador de Escalafón y Pensiones del Gobierno Regional de Junín, por haber incurrido en presuntas faltas administrativas, conforme lo establece Artículo 85° de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, precisados en los literales: **a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento; d) La negligencia en el desempeño de sus funciones; y, q) Las demás que señale la ley;** en consecuencia, **ARCHIVASE DEFINITIVAMENTE** los actuados en este extremo. **A CONOCIMIENTO** de los interesados.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APERTURAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra los siguientes funcionarios:

- ✓ Lic. JULIO CESAR MUNGI NÚÑEZ, como Sub Gerente de Cooperación Técnica y Planeamiento del Gobierno Regional de Junín, por haber incurrido en presuntas faltas administrativas conforme lo establece Artículo 85° de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, precisados en los literales **a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento; d) La negligencia en el desempeño de sus funciones; y, q) Las demás que señale la ley.**

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al funcionario comprendido en el procedimiento que se está instaurando, otorgándole el plazo que señala el artículo 106° y 111° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM – Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, a fin de que efectúe los descargos que estime conveniente, garantizando así el derecho de defensa y el debido procedimiento.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR al Área de notificaciones el diligenciamiento de la presente Resolución, conforme a la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria mediante Decreto Legislativo N° 1029.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


CPC. CIRO CAMARENA HILARIO
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto
y Acondicionamiento Territorial
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes.

HYQ 18 OCT 2018

Abog. A. Antón
SECRETARÍA GENERAL